



LA SEMANA
DE ROMÁN
REVUELTAS

Sacerdotes soplones

La culpa de este galimatías, sin embargo, no es del Gobierno sino de un sacerdote irreflexivo. Toca a la Iglesia poner orden en sus filas y, sobre todo, dedicarse a lo suyo: su negocio no es la seguridad pública, sino la salvación de las almas

La que le ha caído encima al señor arzobispo de Durango: el hombre se lanzó valientemente al ruedo y, sin más, proclamó que Joaquín Guzmán Loera tiene su guarida principal "más adelante de Guanaceví", un poblado que dista unos 300 kilómetros de la capital del estado. "Por ahí vive *El Chapo*. Todos lo sabemos, menos la autoridad". Luego de tan aturdida franqueza, le han llovido toda clase de invectivas, más allá de que las supremas autoridades, suponiendo que don Héctor González Martínez no sólo sabe lo que *todos* saben sino que posee datos privilegiados, le hayan pedido que desembuche su jugosa información delante de un torvo agente del Ministerio Público o, de plano, que acuda a alguna de las delegaciones federales encargadas de combatir el narcotráfico.

Los hombres de la Iglesia, engallados desde la llegada de un presidente de crucifijo y golpe de pecho, opinan ya alegremente sobre toda clase de asuntos terrenales. Y así, no hablan solamente de los pecados de la carne sino que se aventuran en los pantanosos terrenos de la política, un tema que les estaba explícitamente vedado en los tiempos del nacionalismo revolucionario. México, hoy, no es precisamente un Estado confesional pero el laicismo se bate lastimosamente en retirada y ya no nos queda del todo claro dónde comienza lo del César y dónde termina lo de Dios. Naturalmente, somos un país mayormente católico

y avasalladoramente guadalupano pero el Altísimo, hasta hace poco, no figuraba en los discursos oficiales por más que, como bien lo hacía ver el entrañable Carlos Castillo Peraza, lo primerísimo que hacen los jugadores mexicanos del fútbol al pisar la cancha sea persignarse.

En fin, el asunto es que el mandamás de la arquidiócesis de Durango soltó una verdadera bomba al cuestionar, de manera expresa y descocada, la probidad de unas autoridades que, teniendo delante

**México,
hoy, no es
precisamente
un Estado
confesional,
pero
el laicismo
se bate lastimosamente
en retirada
y ya no
nos queda
del todo
claro dónde
comienza
lo del César
y dónde
termina
lo de Dios**

unas evidencias perceptibles para cualquier hijo de vecino, no se dado siquiera cuenta de que el criminal más buscado de Estados Unidos (Mexicanos) habita alguno de los modestos ranchitos del municipio de Guanaceví. Tan colosal y sospe-

chosa omisión se debería, desde luego, a la tenebrosa complicidad del poder político con el *narco*. *El Chapo*, un individuo que se codea con personajes de relumbrón y que decide sobre cuestiones de alcance nacional, sería prácticamente intocable. Vamos, sale a pasear por las calles delante de las narices de la gente. Y el Gobierno ni se entera.

Más allá del revuelo causado por el lenguaraz arzobispo, la primera y más directa consecuencia de sus declaraciones ha sido el asesinato de dos militares encargados de tareas de inteligencia en la región. El mensaje que los sicarios dejaron sobre sus cadáveres no puede ser más claro: "Con *El Chapo* nunca van a poder, ni sacerdotes ni gobernantes". Se le reprocha al arzobispo haber provocado indirectamente estas muertes pero es una recriminación absurda, porque ¿acaso la libertad de palabra está supeditada al hecho de que una declaración verbal suponga, en automático, un asesinato? Si así fuere, vivimos en el peor de los mundos: el Estado es incapaz de asegurar la más elemental de las garantías, a saber, la seguridad de sus ciudadanos y de sus agentes. Es cierto que hemos visto, por lo que parece, una relación de causa y efecto pero la mera premisa de que "no hables porque te mato (o mato a la gente encargada de combatirte)" es mucho más escandalosa, e inaceptable, que cualquier tropezón de un obispo.

Ha sido también muy sorprendente, a propósito del episodio de monseñor González Martínez, el



sesgado llamamiento del secretario de Gobernación para que los sacerdotes colaboren directamente como informadores de las autoridades aprovechando su privilegiada condición de pastores. Esto, con perdón, es una aberración. Implica, de entrada, el aprovechamiento de la divinidad al servicio de la policía. Supone, además, el reconocimiento —es decir, la integración— de una estructura religiosa como parte del aparato del Estado para fines que no tienen nada que ver con lo celestial sino con... lo criminal. Nada que ver.

La culpa de este galimatías, sin embargo, no es del Gobierno sino de un sacerdote irreflexivo. Toca a la Iglesia poner orden en sus filas y, sobre todo, dedicarse a lo suyo: su negocio no es la seguridad pública sino la salvación de las almas. ■■

revueltas@me.com

